*"La Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad, no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida" (Fallos 330:4866, considerando 15). Si bien el legislador tiene amplias facultades para organizar el sistema previsional, debe hacerlo dentro de límites razonables, de modo que no afecte sustancialmente los derechos emergentes de la seguridad social (Fallos 337:1277).*

**Expte. N° FSA 8668/2023 "RODRIGUEZ, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes por movilidad"**

**EXPRESO AGRAVIOS.**

**EXCMA CAMARA**

Julia Tamara Toyos, en mi carácter de apoderada de la parte actora, con domicilio procesal en Avenida Belgrano N° 1188 de esta ciudad, Domicilio Electrónico registrado bajo el CUIL 27-26685280-6 a V.SS. Respetuosamente digo:

1. **PERSONERIA:**

De las constancias de autos surge el carácter invocado.

1. **OBJETO:**

Que, por intermedio del presente escrito, en legal tiempo y forma vengo a fundar el recurso de apelación que oportunamente fuera interpuesto contra la sentencia de primera instancia de la secretaría Previsional del Juzgado Federal de Salta I, por causar agravios irreparables a mi parte.

1. **EXPRESO AGRAVIOS**

La sentencia agravia a mi parte por los siguientes puntos:

{% if Movilidad\_Ley\_27609\_Si %}

1. Movilidad Ley 27.609 {% endif %} {% if Decreto\_274\_24\_Si %}
2. Decreto 274/24 {% endif %} {% if Movilidad\_Ley\_27609\_Si %}
3. **Movilidad Ley 27.609**

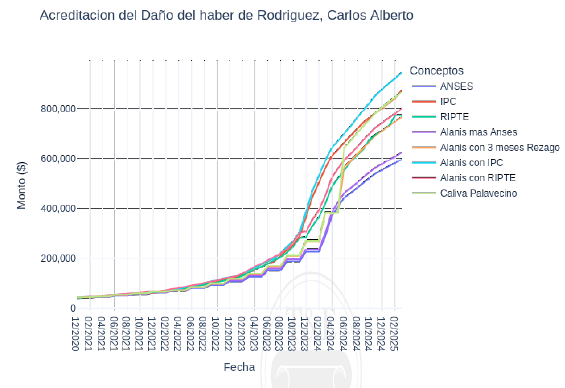
**Me agravia respecto de la Movilidad al resolver** **por cuanto dice:**

*“En cuanto a la ley 27.609 (BO 04/01/2021) cabe afirmar que dicha normativa estableció una nueva movilidad trimestral de las prestaciones, modificando los índices fijados en los arts. 32 de la ley 24.241 y 2 de la ley 26 .417, cuya fórmula se encuentra integrada por la variación de los recursos tributarios por beneficio y por la variación de un índice combinado. Este último se compone en partes iguales por el índice General de Salarios (IS) publicado por el INDEC y por la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicada por la Secretaría de la Seguridad Social. Atento al criterio sentado en fecha 5 de mayo de 2025 por la Sala II de*

*la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en los autos “Palavecino, José Rubén c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (Expte. N° 16057/2018), en donde se declarara la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad instauradas por el art. 1° de la ley 27.609, difiérase para el momento de practicarse liquidación el análisis del impacto de dicha fórmula en la evolución de los haberes de la parte actora, demostración que deberá llevarse a cabo en los términos del referido precedente.”*

Al momento de dictarse la sentencia no está vigente la ley 27.609 y el daño ha sido reconocido. En el análisis de la modificación de la pauta de movilidad, reconoce que actualmente se aplica el decreto 274/24, y difiere para la ejecución el análisis del impacto de la fórmula de la ley 27.609, impacto que ya ha sido analizado por el poder ejecutivo al dictar el decreto ley 274/24, y el daño ha sido reconocido por el legislador en el debate parlamentario del proyecto de ley de movilidad que fue vetado por el gobierno.

Diferir la pauta de movilidad del haber de mi mandante en el período de vigencia de la ley 27.609, afecta el debido proceso y hace un análisis sesgado de la realidad, por cuanto el impacto ya se ha acreditado, solo falta saber que índice utilizar, pero sea que se use Caliva Márquez, extendido, alanis, IPC, RIPTE o UM, en todos el daño ha sido notorio.



La falta de una movilidad adecuada en el período , afecta el haber jubilatorio de mi mandante y la pauta de movilidad deja de cumplir su función o lo hace de una manera deficiente, lo cual afecta derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional como son la garantía de integralidad (art. 14 bis ), el derecho de propiedad (art 17 CN) , el derecho al desarrollo humano ( art 75 inc. 22) , y los derechos que emanan de los tratados internacionales(art 75 inc23), pero sobre todo afecta el derecho a la vida y a una vejez digna.

Esta forma de resolver le causa un agravio a mi mandante por los índices que elige y por el diferimiento para la etapa de ejecución.

El daño que produjo la ley de movilidad en los haberes de los jubilados es tangible y de público y notorio y ha sido reconocida por el gobierno nacional en el [decreto 274/24](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-274-2024-397577/texto) expresamente al decir:

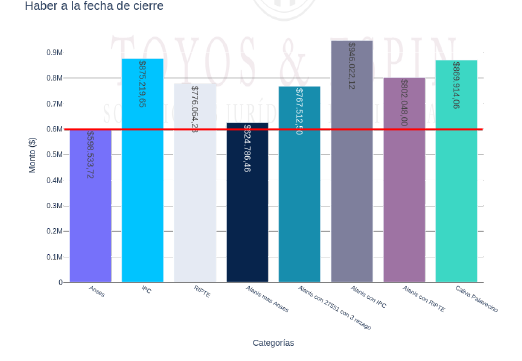
Texto

Descripción generada automáticamenteTexto

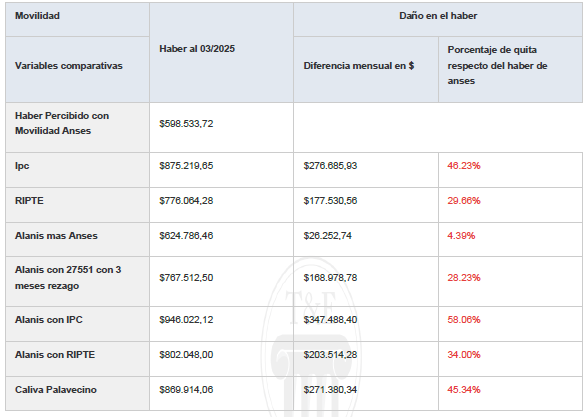
Descripción generada automáticamente

No hay mucho más para decir, por cuanto el propio estado reconoció las falencias e insuficiencia de la formula y el daño que le ocasiona a los adultos mayores, al grado tal que justifica la necesidad del decreto de emergencia en la realidad.

**Daño en el caso concreto**. Partiendo del haber percibido de mi mandante y **solo aplicando pautas de movilidad, a diferencia es la siguiente:**



Resulta contradictorio que el juez de grado diga que en la etapa de ejecución analizará si los aumentos son insuficientes y se basará en el principio de progresividad para resolver. Explica cómo hará el análisispara determinar en el caso particular, en base a evidencia concreta, que la norma impugnada resulte efectivamente regresiva respecto de la ley previa, lo cual resulta innecesario atento a las variables numéricas expresadas en el párrafo anterior, pues la inflación fue casi el doble que los aumentos dado a los haberes previsionales.



No se puede desconocer la insuficiencia de la ley de movilidad de los haberes jubilatorios por cuanto la misma fue reconocida por el poder ejecutivo que quien tiene a su cargo el pago de los haberes previsionales. El gobierno lo reconoció públicamente y sigue otorgando bonos.

A modo de ejemplo, los bonos de diciembre 2023 y enero 2024 tuvieron una incidencia del 55% en el haber mensual.

Estos agravios intentan demostrar lo que implicaron estas sucesivas reformas previsionales desde 2017 a la fecha en el haber de los jubilados y cómo afectaron la integralidad del haber jubilatorio de mi mandante, debiendo ser evaluadas de manera conjunta pues el haber de mi mandante es uno solo, y la aplicación de las normas dictadas en el periodo 2017 a 2024 incumplen con la manda Constitucional y omiten darle a las normas el contenido que previó el convencional constituyente al darle al Poder Legislativo la obligación de fijar por ley el derecho a la movilidad jubilatoria, así dijo el máximo tribunal *“la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad, no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida”* ([Fallos 330:4866, considerando 15](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)) *y que si bien el legislador cuenta con amplias facultades para organizar el sistema previsional, debe hacerlo dentro de ciertos límites de modo de no afectar de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social* (Fallos 337:1277)”

Si se afecta el derecho a la movilidad jubilatoria, se afecta el derecho de propiedad, el derecho a una vejez digna; el derecho a la libertad y el derecho a la vida, por cuanto la merma en su haber lo coloca por debajo de línea de pobreza. Su haber jubilatorio no refleja el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de su vida, y en consecuencia no resulta sustitutivo del salario.

No podemos olvidar que la CSJN tiene dicho que *“…La Constitución Nacional establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social”, dispone que las jubilaciones y pensiones serán móviles”. Es indudable que el mandato constitucional se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer criterios que se estimen adecuados a la realidad para determinar los haberes previsionales, pero los cambios de circunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en su comienzo, se torne irrazonable. Cuando ello sucede el cumplimiento de aquel mandato constitucional atañe también a los restantes poderes públicos, los que deberán dentro de la órbita de su competencia, hacer prevalecer el espíritu de los constituyentes, dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia”* ([Fallos 301:317](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=2271)).(el subrayado me pertenece)

La sentencia me agravia por cuanto hace un análisis sesgado de la realidad y lo que en su momento pudo ser razonable en su momento, el cambio de circunstancias lo tornó irrazonable. Es lo que sucede por cuanto difiere para la etapa de ejecución en análisis de constitucionalidad de la ley 27.609, donde la movilidad fue muy por debajo de la inflación, conforme lo acredito en autos y la ley ya no está vigente.

Dependerá el índice que se elija para comparar los aumentos que dio la ANSES a los jubilados para ver la pérdida que tuvo el haber. Con cualquier índice que se elija pierde, pero con la inflación, índice que se utlizará para la movilidad jubilatoria desde abril de 2024. La fórmula de movilidad de la ley 27.609 no tenía un componente directo la inflación, sino otras variables que han sido modificadas por el gobierno de turno, como son la recaudación tributaria, los recursos o los beneficiarios del sistema, y que la forma en que da los aumentos tienen un rezago que es insostenible en el periodo inflacionario que vivimos, dado que los jubilados viven con el aumento de las variables económicas con 6 a 9 meses de rezago.

Solicito se resuelva aplicando el criterio sentado en el precedente de esta Sala **“Colina, Adolfo Humberto c/ ANSES s/Reajustes Varios”** **Expte Nº34761/2018** y en base al precedente de la Sala II recaído en autos **“Palavecino, Jose Rubén c/ ANSES s/Reajustes Varios”** **Expte. Nº FSA 16057/2018.** {% endif%} {% if Decreto\_274\_24\_Si %}

1. **Planteo de Inconstitucionalidad del Decreto 274/24**

Que, ,sin perjuicio de la derogación de la Ley 27.609 por medio del DNU 274/24, y remitiendo a lo indicado ut supra, como también lo referido en el punto de integralidad, planteamos la inconstitucionalidad del régimen de movilidad instaurado por dicho decreto, en tanto consolida un criterio de actualización que vulnera los principios constitucionales que rigen el sistema previsional argentino, particularmente el principio de movilidad real, la naturaleza sustitutiva del haber jubilatorio y el derecho a una vejez digna.

El propio Decreto 274/24 reconoce expresamente el fracaso de la Ley 27.609, al admitir que su aplicación generó “resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”. Tal afirmación oficial constituye un reconocimiento estatal de la inconstitucionalidad sobreviniente de la fórmula derogada, a partir de la afectación concreta al poder adquisitivo de los haberes. Sin embargo, lejos de revertir dicha situación, el DNU instaura una nueva fórmula de movilidad basada exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluyendo cualquier componente vinculado con los salarios, lo cual reproduce una afectación a los principios constitucionales ya comprometidos durante la vigencia de la ley anterior.

El Dr. Castellanos en su voto en disidencia en los autos “Cendan, Rodolfo Lisandro c/ ANSES s/Reajustes Varios”, al analizar la aplicación de la fórmula de la Ley 27.609, sostiene que la movilidad no puede concebirse como una mera actualización inflacionaria, sino que debe mantener una proporcionalidad razonable entre pasividad y actividad, conforme la doctrina de la Corte Suprema y la interpretación del principio de sustitutividad. En palabras de Bidart Campos, citadas por el magistrado, la movilidad implica mantener una relación sustitutiva entre el haber de pasividad y el salario en actividad, no sólo su poder adquisitivo nominal.

Asimismo, el Dr. Castellanos descarta tanto un índice exclusivamente inflacionario como uno puramente salarial, y en su lugar propicia una pauta mixta, integrada en un 50% por variación de salarios (como el RIPTE) y otro 50% por evolución de precios (IPC), tal como fue admitido en el precedente “Caliva”. Esta fórmula atiende equilibradamente al poder adquisitivo y a la relación con los ingresos en actividad, satisfaciendo los fines constitucionales del sistema previsional.

En ese marco, el nuevo régimen instaurado por el Decreto 274/24 desconoce la necesidad de incorporar el componente salarial en la determinación de la movilidad, con lo cual reproduce el vicio de inconstitucionalidad que afectó a la fórmula anterior, ahora bajo una nueva forma legal, lo que habilita su control judicial, dado que luego de un proceso inflacionario, que debe ser saneado, los salarios tienden a recuperar su poder adquisitivo.

Por todo lo expuesto, y sin perjuicio del reconocimiento estatal del perjuicio generado por la Ley 27.609, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 274/24 en cuanto establece un régimen de movilidad jubilatoria basado exclusivamente en el IPC, por cuanto tal modalidad no garantiza el principio de sustitutividad, vulnera la integralidad del haber previsional el cual se aleja del salario real del jubilado y no mantiene su poder en el tiempo y además, desconoce el estándar mínimo de una movilidad razonable, progresiva y proporcional, conforme surge de los principios de raigambre constitucional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), y la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es necesario reparar al daño, al 3.24 y recomponer el haber previsional, que la 27.609 ocasionó a nuestro mandante afectando su proyecto de vida y el derecho a una vejez digna y de no recomponerse el mismo, cualquier otra ley de movilidad, hará que daño permanezca en el tiempo.

Desde que mi representado se jubiló, a la fecha de estos agravios, se suspendió la ley 27426, se dictó la ley N° 27609 , se derogo la ley 27609 y se dictó en DNU 274/24 por lo que ahora la movilidad de los haberes jubilatorios se está dando por decreto, relacionados con la inflación, no siendo esa una facultad del poder ejecutivo, aunque sirvió que venga a complementar la insuficiente pauta de movilidad de la ley N° 27.609 y que se fije de manera mensual el aumento en los haberes de los jubilados, por lo tanto solicito intime al Poder legislativo a sancionar una ley que contemple el contenido que el convencional constituyente de 1957 previó al determinar que las jubilaciones y pensiones debían de ser móviles para que los jubilados puedan mantener el nivel de vida que tenían cuando estaban en actividad mediante la obtención de un beneficio que sea sustitutivo del salario, y que mantenga su valor durante el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta que se necesita previsibilidad y mantener las variables, de monto contrario, es parche sobre parche y siempre pierde el jubilado. {% endif %}

1. **MANIFIESTO**

Solicito analice los presentes agravios teniendo en cuenta el desarrollo que hace la CSJN sobre el [principio de progresividad](https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/22/documento) en materia previsional y el propósito constitucional de promover el bienestar general y afianzar la justicia el cual debe ser entendido como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa mediante pronunciamientos que conduzcan a consagrarla, así dice: *"Cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llega inclusive a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. Asimismo, señaló que la latitud de facultades que se ha reconocido al legislador para organizar los sistemas jubilatorios y establecer las condiciones con sujeción a las cuales se acuerdan los beneficios derivados de aquéllos, debía entenderse condicionada a que esas facultades se ejerciten dentro de límites razonables, o sea de modo que no hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social, acordados a las personas comprendidas en los regímenes previsionales”* ([Fallos: 307: 2376](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=24586)), es por lo que solicito al tribunal garantice el derecho a que mi mandante tenga un haber integral y una movilidad jubilatoria que cumpla con su función, que no es otra que mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio, de manera tal que sea sustitutivo del salario y refleje el esfuerzo contributivo realizado durante su vida laboral activa, teniendo en consideración la protección especial que merecen los adultos mayores como sujetos vulnerables que gozan de especial tutela, en concordancia con lo resuelto en los Fallos [“Itzcovich”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5796151)328:566),[“Sánchez”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5838941)(328:1602),[“Badaro”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)330:4866),[“Blanco”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)341:1924)[“Giménez”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7678911)344:1788), “[Garay Corina](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7717371)” (344:3567) entre otros.

Las modificaciones en la fórmula de cálculo de la movilidad previsional, no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse una solución que se adecue a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezca la progresividad de los derechos humanos. Al respecto cabe recordar que el Alto Tribunal sostuvo que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica de un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos [(Fallos 331:250](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6398361&cache=1628881211401)).

Cada reforma previsional se sitúa siempre en un marco de sucesiones de emergencias casi inacabable , lo que lleva a preguntarnos como dice Cassagne, si se cumple con “el marco constitucional de la emergencia”, el que según el mismo autor requiere que “no se conculque de un modo definitivo el núcleo de derechos básicos de la Constitución, particularmente los derechos de propiedad de los particulares (art. 17), el principio de igualdad ante la ley (art. 16) y la garantía de la razonabilidad o justicia, consagrada en el art. 28, CN.” [[1]](#footnote-1)

La normalización de la emergencia en nuestro país y sus graves consecuencias con respecto al cercenamiento de los derechos constitucionales es tan evidente que el entonces presidente de la Corte Suprema sostuvo ya hace más de diez años: *“cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo de más de setenta años. Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico”*.

Esa emergencia casi permanente llevó así a la tolerancia de un Estado pendiente de las variables económicas y financieras coyunturales y restrictivo de las libertades y derechos fundamentales.

Ante el altar de la emergencia, el Estado (por acción o por omisión) ha venido sacrificando sistemáticamente derechos elementales reconocidos por la Constitución, en especial, los de los más vulnerables. Y así ha dado por tierra con varios de los principios aplicables en esta materia, como el de progresividad y no regresividad que importan un escrutinio agravado de la razonabilidad de las normas adoptadas como consecuencia de las “emergencias” tanto por el legislador como por el Poder Ejecutivo Nacional.

Es que como afirma Rossi, las medidas regresivas respecto de grupos vulnerables deben ser más excepcionales aún y sujetas entonces a un escrutinio más estricto. La deferencia hacia el Estado respecto de la adopción de medidas regresivas respecto de estos grupos debe ser mínima. Al igual que el contenido mínimo de un derecho no admite restricción posible, tampoco la admite el estado de goce y ejercicio de un derecho por grupos considerados desfavorecidos. [[2]](#footnote-2)

La CSJN al referirse a emergencias y grupos vulnerables dijo: “*Que, por último, cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos”(*[*Fallos 341:1924*](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)*).*

Por lo expuesto es que, en casos como el presente, la prohibición de regresividad agrega un nuevo criterio al control de razonabilidad de las leyes y reglamentos cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan derechos económicos, sociales y culturales, y es por ello que solicito a VSS hagan lugar al agravio formulado e intimen al Congreso de la Nación a hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado, reparando el daño sufrido en el haber de mi mandante fijando el contenido concreto de las jubilaciones en el período en debate*,* y como dijo la CSJN en “Blanco” *con especial ponderación de los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por este Tribunal en numerosos precedentes (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602), de conformidad con la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de derechos sociales”*, donde si bien se refería al índice de actualización de remuneraciones, aplica también para la pauta de movilidad.

1. **MANTENGO RESERVA**

Hago reservas de los recursos ordinarios y extraordinarios que prevé la ley 48 para recurrir oportunamente ante la C.S.J.N. mediante el Recurso Extraordinario Federal; en tanto están juego la interpretación de una norma federal art 14 bis, 16, 28 , 31 y 75 de la CN y tratados internacionales por cuanto una resolución adversa afecta la integralidad del haber jubilatorio de mi mandante, el derecho de propiedad , de igualdad , el principio de progresividad y no regresividad, el principio de supremacía constitucional todo lo cual afecta el derecho de mi mandante a una vejez digna.

1. **PETITORIO**

Por lo hasta aquí expuesto solicito a la Excma. Cámara que:

1. Tenga por fundado el recurso de apelación en legal tiempo y forma contra la sentencia de primera instancia en lo que fuera materia de apelación
2. Se corra traslado de los agravios por el término de ley.
3. Se haga la expresa reserva del caso federal
4. Se revoque la sentencia apelada en cuanto fuera materia de

agravios.

PROVEER EN CONFORMIDAD

1. Cassagne, Juan C. “Curso de Derecho Administrativo”, La Ley, Bs. As., 2018, T. II, p. 242. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rossi, Julieta “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Courtis, Christian (comp.), cit, pp. 79 y ss. [↑](#footnote-ref-2)